



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN SALA CIVIL

Medellín, diecisiete (17) de enero de dos mil veinticuatro (2.024)

Ref.: Exp.: 05001 31 03 010 2022 00174 01

ACLARACION DEL VOTO

Me pronuncio aclarando el voto, considerando de entrada que la decisión de anular actuaciones de primera instancia, está en cabeza del magistrado sustanciador, tal como se desprende del artículo 35 del C. de P. C.; y si este pone en conocimiento un proyecto de la Sala de Decisión, los revisores podrán dejar el claro cuál es la competencia de la Sala, donde si no procediera la decisión colectiva, estos deberán expresarlo de tal manera.

En esa línea, si se profirió sentencia anticipada bajo el amparo del numeral 2º del artículo 278 procesal civil, y el motivo de inconformidad estriba en que se omitió el recaudo de las pruebas que en su oportunidad se solicitaron, es necesario resolver de fondo evacuando primeramente tal tipo de reparo, pues como he sostenido en diversas providencias, en las que el hoy ponente ha disentido:

“El artículo 278 del C. G. del P. deja en claro que “En cualquier estado del proceso, el juez deberá dictar sentencia anticipada, total o parcial”, entre otros eventos, “Cuando no hubiere pruebas por practicar...”

“Valga recordar que las decisiones judiciales se toman con base en pruebas (artículo 164 C. G. del P.), por lo que el artículo 278 procesal civil no puede ser marginal a ello, entonces, si en el ejercicio de contradicción el demandado solicitó como pruebas, entre otras, el interrogatorio de parte del representante legal de la demandante, “para que resuelva preguntas sobre el escrito de demanda y los medios exceptivos propuestos”, petición que relaciona con la

documental aportada y relacionada con el “*Voto positivo de Davivienda en el proceso de reorganización.*”, pues se tiene que existe un medio probatorio oportunamente solicitado, del que se advierte sumariamente su conducencia, pertinencia y utilidad, razón por la cual deberá ser recaudado.

“Recordemos que el debido proceso y el derecho de contradicción debe estar presente en todo el trámite procesal, tal como lo indican los artículos 2º, 11, 14, 42.4, 167, 170 y 171 del C. G. del P., donde en cuanto a ello es factible aplicar juicio de constitucionalidad que sobre materia, indicó:

“14. En los anteriores términos, entre los contenidos del debido proceso, se encuentran las garantías mínimas probatorias que deben ser resguardadas en toda actuación. Forma parte de ese mandato constitucional también el derecho fundamental a la defensa, el cual supone, así mismo, las facultades de presentación, controversia y valoración probatoria. Por su lado, el derecho de acceso a la justicia se incorpora al núcleo esencial del debido proceso y, además, una de sus garantías consiste en que las controversias sean adoptadas con el pleno respeto de las formas propias de cada juicio. Adicionalmente, según la Corte, el debido proceso materializa el derecho de acceso a la justicia. Debe ahora la Corte profundizar en el derecho a contar con unas garantías mínimas probatorias.

“15. El régimen probatorio ocupa un lugar central dentro del sistema de protecciones del debido proceso, pues solo a partir de un robusto debate fundado en medios de convicción puede establecerse la configuración de los supuestos de hecho previstos en las reglas legislativas y la aplicación de las consecuencias jurídicas para cada hipótesis. En este sentido, las garantías mínimas probatorias que hacen parte del debido proceso constituyen un conjunto de posiciones jurídicas esenciales alrededor del papel de los elementos de prueba dentro de los procesos judiciales. Este grupo de posiciones compone a su vez lo que se ha denominado el debido proceso probatorio, como salvaguarda del derecho de defensa y de las partes en general.”. Corte Constitucional, Sentencia C-163/19.

“Refuerza la anterior idea la misma Corte Suprema de Justicia, cuando ya sobre materia probatoria, anotó:

“En efecto, el denominado principio de la ‘necesidad de la prueba’ se funda en la vigencia de la publicidad y contradicción de la prueba, y en que el conocimiento adquirido por el juez al interior de proceso, se ha logrado con la intervención de las partes, y con observancia del rito previsto para los medios de convicción.

“Ese postulado entraña dos límites para el juez: el primero (positivo) que lo grava con el deber de ajustar su juicio crítico-valorativo solamente al conjunto de las probanzas incorporadas al proceso en forma legal, regular y oportuna; el segundo (negativo) que le impide fundar su decisión en

soporte distinto a ese caudal probatorio (CSJ, SC 1819 del 28 de mayo de 2019, Rad. n.º 2010-00324-01; se subraya).” Cursivas, cita y subrayado en el texto. Cita realizada en la Sentencia SC286-2021, 15 de febrero de 2021.

“Entonces, el recaudo de probanzas oportunamente solicitadas, hace parte del núcleo esencial del debido proceso, por lo que en las presentes no se satisfacía el supuesto normativo invocado para proferir sentencia anticipada, razón por la cual y según lo expuesto, la correspondiente providencia habrá de ser revocada pues había pruebas por practicar.

“Por todo lo anterior, y con el fin de salvaguardar los derechos al debido proceso, acceso a la administración de justicia, contradicción y necesidad de la prueba, se revocará la decisión de primera instancia, para en su lugar disponer que se continúe con el trámite procesal.”¹ Citas, subrayado y cursivas dentro del texto.

El ordenamiento para un asunto de omisión probatoria no prevé “*dejar sin efectos*” la decisión de primera instancia, sino, el papel del superior funcional es resolver la alzada, a no ser, que no se satisfagan los presupuestos procesales para proveer, ora que se trate de la existencia de una causal de nulidad insanable.

De todos modos, y por ello acompaño el proyecto, ya que el *a quo* a través de la providencia del 21 de febrero de 2023 al decir “... se resolverá de fondo la Litis conforme lo dispuesto por artículo 278 numeral 2, del Código General del Proceso...”, con ello anunció la decisión de sentencia anticipada, precisamente por la causal de “*Cuando no hubiere pruebas por practicar*”, sin que lo mismo hubiera sido recurrido por la parte interesada.

Cordialmente:



JOSE OMAR BOHORQUEZ VIDUEÑAS
Magistrado

¹ Ver, entre otras, sentencia 13 octubre de 2022, Radicado 05001 31 03 017 2020 00141 01.